

ma de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis Aguilar,* secretario.

Es copia. México, Mayo 8 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el juzgado de Distrito de Zacatecas por Feliciano Mireles en representacion de su padre Roque del mismo apellido, contra los procedimientos de la Administracion de rentas de Pinos, que por acuerdo del gobierno de ese Estado ha embargado al quejoso unos terrenos llamados Castellanos.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el gobierno del Estado en su comunicacion de fecha 28 del actual manifiesta, que con objeto de obsequiar el decreto que el Juzgado se sirvió dictar con fecha 25, en el juicio de amparo promovido por el C. Feliciano Mireles en nombre de su padre D. Roque del mismo apellido, por el embargo intentado contra este por la administracion de rentas de Pinos, á causa del adeudo que tiene pendiente por los terrenos baldíos que le fueron adjudicados por la gefatura política de aquel Partido, dice al Juzgado, que el gobierno del Estado en uso de las facultades que le fueron concedidas para que en los ramos de la administracion pública, dictara todas las providencias que estimara convenientes á la conservacion del orden, á la marcha administrativa y á la seguridad de la vida é intereses de los habitantes del Estado.

TOMO IV.—PARTE II.

do, arbitrando los recursos que fueren necesarios, y por decreto de la legislatura del mismo, en 24 de Diciembre de 1857 y mas tarde por el Ministro de la Guerra y general en jefe del ejército federal, C. Santos Degollado, en su disposicion suprema de 26 de Octubre de 1858, autorizó á la gefatura política de Pinos, para que procediera á la enagenacion de los terrenos baldíos de Castellanos, y atendiera con sus productos al levantamiento de fuerzas que le ayudaran á contrariar la injusta guerra que el partido reaccionario hacia al gobierno legítimo; y en virtud de tal autorizacion, la mencionada gefatura enagenó los terrenos expresados, y como de su importe total adeuda una parte el C. Roque Mireles, es por ese motivo que la administracion de rentas de Pinos ha embargado al adjudicatario y de cuyo procedimiento se ha quejado ante la autoridad del Juzgado. Añade, que los terrenos de Castellanos ó el valor de su renta, pertenecen al Estado incuestionablemente, pues basta ver la autorizacion del Ministerio de la Guerra, para convencerse de esa verdad; y por estas razones y las vertidas en la comunicacion del C. Visitador del Estado de las que tiene conocimiento el Juzgado, cree que no debe ingerirse en este negocio, en cuyo sentido se dirigió al Ministerio respectivo para que se sirva resolver lo conveniente.

Ahora bien, consideradas con atencion las razones expuestas por el gobierno para pretender que los terrenos baldíos de Castellanos ó su valor pertenecen al Estado, en virtud de las autorizaciones dadas al Ejecutivo por la legislatura en 24 de Diciembre de 1857 y despues por el C. Ministro de la Guerra en 26 de Octubre de 1858, no pesan en la opinion del promotor que suscribo para que deje el Juzgado de conocer en este negocio, en que es el único competente, segun los artículos 1º y 3º de la ley de 20 de Enero de 1869 y 14 de la de 20 de Julio 1868; por otra parte, el artículo 18 de la misma ley, previene que el decreto sobre

adjudicacion de un terreno baldío, no puede cumplirse sin que sea antes aprobado por el Ministerio de Fomento á donde al efecto se remitirá testimonio del expediente y copia del mapa por conducto del gobernador del Estado, quien lo acompañará con el informe que tenga por conveniente, disposiciones repetidas en el Reglamento de gefaturas de hacienda, en el capítulo 8º, artículos 35 y 38 de 15 de Julio de 1871 que expresan, que la ley de Julio y su relativa de 19 de Setiembre del mismo año, servirán de base á las gefaturas, para las operaciones que respecto á dichos terrenos baldíos deben practicar; *en el concepto de que si en la ocupacion ó enagenacion de los que existan en la demarcacion del Estado á que corresponda la oficina de su cargo, se hiciera alguna fuera de las reglas que establecen las dos disposiciones citadas, darán cuenta desde luego á la secretaría de Hacienda, para que determine lo conveniente; y el segundo, que las gefaturas no recibirán el precio del terreno baldío enagenado, mientras no tengan en su poder la orden suprema del Ministro de fomento que así lo determine, por haberse aprobado la operacion, única autoridad que segun la ley de la materia tiene facultades para ello; y solo podrán admitir el importe del papel sellado en que debe extenderse el título, avisando inmediatamente á la tesorería general.*

Otra consideracion hay aun para estimar infundadas las razones en que apoya el gobierno del Estado su creencia de que los terrenos baldíos de Castellanos ó su valor, son propiedad de aquel, por el decreto de 24 de Diciembre de 1857 y autorizacion del Ministerio de la Guerra, pues del expediente formado por la oposicion al denuncia de terrenos baldíos de Castellanos, hecha por el C. Roque Mireles y socios, contra el de D. Juan B. Caraza, consta que desde mucho antes del año de 47, los Mireles estaban en pacífica posesion de los terrenos denunciados en Marzo de 1857, ante el C. Juan Arteaga, agente del Ministerio de fo-

mento; que en 16 de Abril remitió á la gefatura política de Pinos el expediente que D. Roque, D. Guadalupe, D. Juan Nepomuceno y D. José María, todos Mireles y D. Ignacio García, promovieron sobre adjudicacion de los terrenos baldíos de Castellanos á fin de que se hiciera saber á D. Luciano de la Rosa el nombramiento comprendido en auto que proveyó dicha agencia, y se le entregase el expediente para que practicara el avalúo y medida necesaria á la adjudicacion; así consta del certificado de fojas 61 vuelta, declaraciones de los testigos examinados á fojas 60 vuelta y 61 frente, y de los documentos de fojas 55, 56 y 57; ademas, por los de fojas 54 y 47 del cuaderno primero aparece, que el general en jefe de las tropas federales, D. José Uruga, por medio de la comisaría, recibió en 4 de Mayo de 1860, en San Luis Potosí y de D. Roque Mireles, cuatrocientos pesos, á cuenta de nueve mil que adeudaba por la adjudicacion de los terrenos de Castellanos, marchando á esta Capital para arreglar con el C. gobernador el pago completo de la referida cantidad; y arreglado que fué con dicho gobernador en 4 de Junio siguiente lo relativo á dicho pago, como aparece de la foja 47 con la firma del C. Jesus Gonzalez Ortega, expresando *que los terrenos referidos pertenecen á la hacienda pública; por último, de la escritura de adjudicacion de 17 de Agosto de 1859, otorgada por la gefatura de Pinos en favor del C. Tomás Aleman del rancho de San Rafael, perteneciente á los mismos terrenos, compuesto de seis y un cuarto caballerías á ciento once pesos cada una, cuyo valor de novecientos noventa y tres pesos setenta y cinco centavos enteró en la administracion de rentas de Pinos. En la dicha escritura se expresa estar otorgada, conforme á la aclaracion hecha por el gobierno del Estado en 10 de Noviembre de 1856, relativa á que examinado con atencion el expediente de denuncia del sitio de Castellanos hecho por D. Ramon García y D. Roque Mireles,*

atendiéndose á la ley de desamortizacion, con arreglo á los datos del expediente y á la consulta hecha al gobierno por el C. Lic. José María Castro, juez de lo civil, sobre que tales denuncios no debian hacerse á virtud de dicha ley, por no corresponder á corporaciones civiles ni eclesiásticas, *pues estaba justificado plenamente, que las tierras de Castellanos eran baldías; y por tanto, el gobierno acordó dispusiera á los denunciante se sugetaran á lo prevenido en las leyes generales, procediendo á hacer su solicitud segun lo prevenido por el Ministerio de fomento en la circular de 9 de Junio de aquel año, teniendo la gefatura presentes dichas leyes generales á que se contrae el decreto del Congreso constituyente publicado en esta ciudad el 3 de Noviembre; en tal virtud, admitido el denuncia del C. Tomás Aleman, del rancho de San Rafael, perteneciente á los terrenos de Castellanos y compuesto de seis y un cuarto caballerías que poseía D. Juan B. Caraza, quien renunció el derecho de preferencia, poniéndolo á disposicion de la gefatura, autorizada ampliamente por la nota oficial del gobierno del Estado de 15 de Diciembre de 1858; en su vista y del denuncia del C. Aleman, y de que no obstante de haber puesto á disposicion de Caraza el indicado rancho no quizo como colindante concurrir á la medida respectiva, bajo pretesto de que le pertenecia y el gobierno cambiaria y entonces lo recobraría de nuevo, y sin querer ocurrir á las citas que se le hicieron para que justificara el derecho que decia tener al rancho mencionado, la gefatura juzgó su conducta capciosa y mal intencionada, por no existir el derecho que suponía; puesto que el Supremo Gobierno, en vista de los datos relativos á los terrenos de Castellanos, *los declaró baldíos y en consecuencia nacionales.**

De lo expuesto resulta, que el Gobierno del Estado, facultado ampliamente por la Legislatura y por el C. Ministro de la guerra, obró bien en autorizar á la Gefatura de Pinos para que adjudicara á los denuncia-

tes aquellos terrenos y empleara los productos en levantar la fuerza necesaria para el sostenimiento de las instituciones liberales, presentando siempre una resistencia vigorosa á los reaccionarios enemigos; tales facultades, así como la guerra de reforma, habiendo concluido en el año de 1870, las pretensiones actuales del Gobierno del Estado retraen la ley y facultades no existentes, por la ley nueva de 20 de Julio de 1863, contra el motivo de las leyes, que es arreglar lo futuro, pues lo pasado no esta ya en su dominio; las leyes positivas, obra de los hombres, no existen sino cuando se promulgan, y no pueden tener efecto sino cuando existen; la libertad civil consiste en hacer lo que la ley no prohíbe, y se mira como permitido todo lo que no está vedado; ¿que sería de la libertad civil, que despues de haber obrado sin infringir la ley, se quedara expuesto al peligro de ser perseguido ó turbado en sus derechos, en virtud de las leyes derogadas?; lo pasado no puede ser del dominio de las leyes nuevas que no lo regían y su poder no puede estenderse á cosas que ya no son; la retroaccion de esas leyes secaría la fuente de confianza y llegaría á ser un principio eterno de injusticia, de trastorno y de desorden.

Por lo expuesto, y con fundamento de los artículos 19, 39, 13, 27, 28 de la ley de 29 de Enero de 1869, 191 de la Constitucion federal, concluye pidiendo se sirva el Juzgado fallar en definitiva, declarando que la justicia de la Union ampara y protege al C. Roque Mireles, contra los procedimientos de la administracion de rentas de Pinos, en el embargo de los bienes del referido C. hecho con acuerdo del Estado, con cuyos actos se ha invadido la esfera de las autoridades y funcionarios de la Federacion.

Así lo estima de justicia.

Zacatecas, 19 de Febrero de 1873. Firmado.—*Jesus M<sup>a</sup> Licona.*

Es copia. Zacatecas, 15 de Febrero de 1873.—*Jesus M<sup>a</sup> Licona.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Zacatecas, Febrero 17 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Feliciano Mireles á nombre de su padre el C. Roque del mismo apellido, contra los procedimientos de la administracion de rentas de Pinos, que por acuerdo del Supremo Gobierno del Estado ha cobrado y embargado al quejoso por el valor de los terrenos baldíos del rancho de Castellanos que le fueron adjudicados, estimando el solicitante que el citado Gobierno ha invadido las atribuciones de las autoridades de la federacion y comprendido su recurso en la fraccion 3ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869. Vistos los informes del Supremo Gobierno del Estado y lo pedido por el C. Promotor fiscal, reduciéndose el primero á decir que los terrenos baldíos de Castellanos le fueron cedidos al Estado por la comunicacion del Ministerio de la Guerra fecha 26 de Octubre de 1858; y el último á que debe concederse el amparo, analizando ampliamente la cuestion y apoyando la solicitud de Mireles. Vistos los autos relativos á la suspension provisional y la citacion para sentencia; las pruebas que el Juzgado mandó recibir y el alegato del C. Lic. Ramon F. Kimball, apoderado del C. Roque Mireles, así como todas las demás constancias de autos y Considerando: que por el artículo 72 de la Constitucion general en su fraccion 24 y la ley reglamentaria de ella fecha 22 de Julio de 1863, el denuncia, adjudicacion y pago de los terrenos baldíos corresponde á las autoridades de la Federacion: que antes de publicarse la Constitucion, por las leyes anteriores estaba fijado el mismo principio: que la comunicacion del C. Santos Degollado fecha 26 de Octubre de 1858 en que se funda el Supremo Gobierno del Estado, de ninguna manera prueba y demuestra que fueron cedidos al Estado los terrenos de Castellanos y que en consecuencia las órdenes dictadas por el mismo Gobierno son una invasion clara y notoria de

las facultades de las autoridades de la Federacion, mas patente teniendo á la vista el expediente formado por el denuncia del C. Juan B. Caraza de los mismos terrenos, de conformidad con lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869 y lo pedido por el C. Promotor fiscal, el Juzgado sentenciando definitivamente este juicio, declara:

Primero: Que la Justicia de la Union proteje y ampara al C. Roque Mireles contra los procedimientos de la Administracion de rentas de Pinos, que por acuerdo del Supremo Gobierno del Estado le ha cobrado el precio de los terrenos baldíos de Castellanos que le fueron adjudicados, embargándolo por lo que quedaba adeudando del precio el referido Mireles, por haber invadido el Supremo Gobierno del Estado con sus órdenes y acuerdos, las facultades de las autoridades de la Federacion.

Segundo: Reponga el representante de Mireles los tres pliegos del sello 5º que se han usado en este juicio con el que corresponde.

Tercero: Se advierte al C. Promotor fiscal por no haber presentado su alegato como debia haberlo hecho segun el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia fecha 9 de Octubre del año próximo pasado.

Cuarto: Remítanse en revision estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, publicándose esta sentencia [en el periódico oficial del Estado, sacándose las respectivas copias para el Semanario judicial. Hagase saber. El C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó. Doy fé.—Firmado.—*Manuel Solana.—Luis G. Chavez*

Es copia que certifico. Zacatecas, Febrero 17 de 1873.—*Luis G. Chavez*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Abril 18 de 1873.—Oisto el juicio de amparo promovido ante el Juzga-

do de Distrito de Zacatecas por el C. Feliciano Mireles, en representacion de su padre el C. Roque del mismo apellido, contra la Administracion de rentas de Pinos, que por acuerdo del Gobierno de ese Estado, ha cobrado y embargado al peticionario por el valor de unos terrenos llamados de Castellanos, que le fueron adjudicados, alegando Mireles, que la orden referida invade las atribuciones de las autoridades de la Federacion, violando la fraccion 4ª del artículo 72 del Pacto federal, así como la ley de 22 de Julio de 1868. Vistas las constancias de autos y considerando: que la disposicion constitucional citada por el quejoso ordena que el denuncie, adjudicacion y pago de los terrenos baldios, corresponde á las autoridades de la Federacion; que la orden dictada por el C. Santos Degollado fecha 26 de Octubre de 1858, en que funda sus procedimientos el Gobierno de Zacatecas, importa una escepcion por el estado que guardaba á esas fechas la República por causa de la guerra, como lo expresa terminantemente la referida autorizacion; que habiendo cesado esa situacion anormal, la República ha vuelto al pleno goce de las garantías otorgadas por la Constitucion, se declara: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia que se revisa, cuya parte resolutiva es como sigue: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Roque Mireles, contra los procedimientos de la Administracion de rentas de Pinos, que por acuerdo del Supremo Gobierno del Estado ha cobrado el precio de los terrenos baldios de Castellanos que le fueron adjudicados, embargandolo por lo que quedaba adeudando del precio el referido Mireles, por haber invadido el Supremo Gobierno del Estado con sus ordenes y acuerdos, las facultades de las autoridades de la Federacion.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos

y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Pedro Ordáz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Juan A. Mateos*, secretario

Es copia que certifico México, Mayo 12 de 1878.—*Lic. Enrique Lanza*, oficial mayor.

## AMPARO

*promovido ante el juzgado 2º de Distrito de México, por Guadalupe Arteaga, contra su consignacion al servicio de las armas.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido por el C. Guadalupe Arteaga, contra la determinacion de la Comandancia militar del Distrito federal que lo destinó al servicio de las armas en el primer cuerpo de caballeria, el 8 de Mayo próximo pasado, supuesto el estado de este juicio que es el de alegar, y haciéndolo en la forma prescrita por la ley, dice: que la justificacion de V. se ha de servir declarar en definitiva, que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Guadalupe Arteaga, contra la providencia de que se queja por haberse violado con ella en dicho C. las garantías que otorga el artículo 5º de la Constitucion, en vista de las razones que paso brevemente á exponer.

Es un hecho enteramente comprobado por el informe que ha rendido la autoridad responsable del acto reclamado, que el dia 8 de Mayo del año pasado fué con.